

Tierra de sueños encontrados entre la ganadería y la conservación

Con una particular historia de migración y colonización y con desarrollos agropecuarios impulsados desde las políticas públicas, Calakmul es un territorio de potenciales conflictos entre sectores con diferentes intereses hacia la biodiversidad, por ejemplo: los ganaderos y quienes buscan preservar una especie emblemática: el jaguar. Como propuesta, se presenta un mecanismo inclusivo de toma de decisiones que apoye la conservación y la gestión ambiental.

La historia reciente nos muestra que Calakmul es un territorio en el que existen muchos intereses que se contraponen. Pareciera que por un lado están las personas dedicadas a la agricultura y la ganadería que reciben apoyos productivos y, por otro, las que privilegian la conservación de la biodiversidad, en un contexto que suele adoptar enfoques estrictos, como el de las áreas naturales protegidas donde no se permite la extracción de recursos ni la producción agropecuaria. Las medidas de conservación a menudo se ponen en marcha sin un diálogo previo en el que los actores involucrados puedan exponer sus aspiraciones e intereses.

En este artículo exponemos brevemente esta situación de potenciales conflictos, ilustrando el asunto con el caso del manejo del jaguar y presentando la propuesta de un mecanismo inclusivo de toma de decisiones, el cual apoye la conservación en un marco que permita mantener formas de vida sostenibles.

Breve historia de la ganadería en Calakmul

En diversos estudios se documenta el proceso de desarrollo agropecuario de Calakmul, que data de la ocupación significativa del lugar a finales de la década de 1960,

cuando se terminó de construir la Carretera 186 y el gobierno empezó la dotación de tierras ejidales para hacer frente a la creciente demanda. Durante el auge petrolero de los años setenta, México invirtió en grandes proyectos de desarrollo en la selva, como la producción de arroz y ganado, para lo que se talaron unas 10 mil hectáreas (aunque al final fracasaron los proyectos arroceros). En tan solo cuatro ejidos, entre 1972 y 1980 desaparecieron más de 8 mil hectáreas de árboles. Con la caída del petróleo y la devaluación del peso en 1982, al gobierno le quedaron pocos recursos financieros y para los agricultores locales había opciones limitadas: sobre todo la agricultura de roza-tumba-quema para la producción de maíz y chile. Así, el periodo de grandes inversiones gubernamentales concluyó con un restringido desarrollo ganadero, muchos agricultores de subsistencia y una gran deforestación.

Después, a los pequeños agricultores se les dio más control sobre el uso de la

tierra y se incrementaron los pastizales a pequeña escala. En 1994 llegó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, con una gama de reformas neoliberales impulsadas desde el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). A principios del siglo XXI, la combinación de la migración a Estados Unidos y la inversión en ganado de una parte de las remesas, además de nuevos subsidios, favorecieron el aumento de pastizales para el ganado.

No solo las políticas gubernamentales han propiciado la ganadería, sino que se percibe como actividad provechosa porque la comercialización de fauna es una alternativa para mejorar los ingresos económicos y resolver necesidades por emergencias médicas o de otra índole. Además, la cría de animales no es tan vulnerable como los cultivos ante fenómenos naturales, ya que se les puede trasladar a lugares seguros si hay huracanes o venderlos si hay sequía.

De frontera agrícola a punto de conflicto de conservación

A finales de la década de 1980, cuando la dotación de tierras ejidales estaba alcanzando su punto álgido, el gobierno federal estableció la Reserva de la Biósfera Calakmul¹ en tierras federales y áreas selváticas conocidas como "extensiones ejidales", las cuales poseían bosques tropicales secos y húmedos con una gran biodiversidad, que habían permanecido casi intactos hasta la década de los treinta. Sin embargo, el decreto, al mismo tiempo que protegía oficialmente la mayor área de selva de México, también sembró las semillas de futuros desencuentros entre pequeños productores y quienes apostaban a la conservación.

Estos conflictos se muestran con mucha claridad mediante las distintas posturas y acciones en torno a los jaguares. México se sumó a la conservación de tan emblemáticos animales al firmar acuerdos internacionales: la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) en 1991 y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 1993. En la reserva de Calakmul se asegura su protección, pero el ataque de jaguares al ganado la dificulta. Son la principal causa de mortalidad de ovejas y cabras, a tal grado que en 2014 y 2015 se asociaron con 42% de las pérdidas. En cuanto al ganado bovino o vacuno, la depredación del jaguar significó solo el 7% de las mermas, muy por debajo de las enfermedades; sin embargo, la muerte de una vaca implica una cantidad de dinero más significativa que la de una oveja. Como respuesta, hay ganaderos que atentan contra la vida de los jaguares, a pesar de que existe un programa de compensación desde 2009.

Sin duda, es enorme el desafío para lograr actividades productivas en un esque-



MAURO SAN VICENTE

¹ Los decretos en torno a reservas de la biósfera incluyen esta palabra sin tilde (biosfera); no obstante, dado que en Ecofronteras la acentuamos normalmente por convenir en términos de divulgación, también lo hacemos en el nombre oficial para unificar el término.

ma de desarrollo sostenible que incluya la conservación de esta especie. Al exponer la situación, queremos dar cuenta de las dimensiones humanas del conflicto y de las tensiones en el manejo del felino en toda la región, al mismo tiempo que señalamos que las represalias contra dichos animales son indeseables.

Dimensiones de la justicia ambiental

Nuestro trabajo en Calakmul da cuenta de que muchos actores tienen una profunda identidad ecológica y perciben una sensación de injusticia, en especial los ganaderos, quienes sienten que llevan toda la carga de la conservación del jaguar.

Tanto ganaderos como milperos construyen su concepción de la equidad con base en cuatro dimensiones de la justicia ambiental: a) *reconocimiento* de los derechos individuales, valores, cultura y sistemas de conocimiento; b) *ecológica*, relacionada con el tratamiento del mundo natural; c) *distributiva*, que incorpora la justicia en la distribución de la carga percibida; d) *procesal*, ligada a la toma de decisiones.

Las pérdidas de ganado y la consiguiente distribución de apoyo o compensación son algunas preocupaciones abordadas en la dimensión de la justicia distributiva. Sin embargo, las necesidades sociales no materiales y las psicológicas —como la confianza o el reconocimiento de la forma de vida campesina— también están en la raíz de los conflictos. Contrariamente a lo que podría creerse, haber experimentado pérdidas de ganado por depredación no es tan determinante en la percepción de justicia; en cambio son muy importantes las relaciones entre actores locales, como son la interacción y el nivel de acuerdo sobre un tema. Esto evidencia que se deben incorporar procesos inclusivos para reconciliar las perspectivas conflictivas de la justicia y lograr una gestión ambiental más exitosa.

Buscar soluciones conjuntas

Es fundamental poder entablar diálogos constructivos, a fin de reconocer diferencias



SOPHIE CALMÉ


y lograr comprensión y confianza mutuas. La gestión ambiental requiere colaboración, evitando centrarse en posiciones antagónicas y explorando múltiples temas para encontrar un terreno común. Por ejemplo, si se inicia una colaboración en torno al agua, tema de interés central para todos, es más fácil abordar posteriormente cuestiones de mayor controversia, como la conservación del jaguar.

Si en primer plano destaca la participación de los actores locales y los aspectos sociales que rodean el conflicto, podrían implementarse programas de mayor arraigo. Los ganaderos podrían obtener asistencia técnica y ser reconocidos como actores clave en el éxito de la conservación del jaguar, al tiempo que podrían obtener beneficios, como instalación de tanques de agua en los pastizales, acceso a la atención veterinaria o cámaras-trampa en áreas donde la depredación es común. Tales programas se deben desarrollar como contratos entre las comunidades y las organizaciones que

proveen el apoyo, en un contexto de protección a la vida silvestre; esto aseguraría que las responsabilidades individuales y de grupo no sean ignoradas y aumentaría la vigilancia de la comunidad.

La percepción de la responsabilidad es fundamental, así que las campañas informativas no solo deben centrarse en la difusión de temas como la ecología y conservación, sino proporcionar una imagen clara de las instancias, sus funciones y responsabilidades. Ayudaría crear una red de informantes locales que incluya a ganaderos concedores de los esquemas de compensación, y también conviene organizar intercambios entre quienes han implementado buenas prácticas para evitar la depredación del jaguar (como cercas eficientes) y los que no lo han hecho.

Para impulsar la comunicación que permita contribuir con ideas para la gestión, trabajamos en la creación de un comité ganadero. No se busca fomentar la ganadería, sino dar voz a personajes que tienden a ser estigmatizados como los villanos de la región. Este comité debería ser invitado a participar en los principales esfuerzos colaborativos en temas de desarrollo sostenible y conservación, como el Comité Municipal de Desarrollo Rural y Sustentable y la Reserva de Biósfera Calakmul.

En conclusión, un conflicto como se enmarca en Calakmul cuestiona no solo nuestra capacidad de coexistir con la vida silvestre, sino la de comunicarnos entre personas y acordar soluciones para apoyar la conservación. Esta es una acción urgente si queremos tener éxito para preservar la biodiversidad en la Tierra y a la vez asegurar un futuro sostenible para los pobladores de este lugar y el resto del mundo. 

Sophie Calmé es investigadora en la Université de Sherbrooke, Canadá, y en el Departamento de Conservación de la Biodiversidad en ECOSUR Chetumal (Sophie.Calme@USherbrooke.ca). Birgit Schmoock es investigadora del mismo departamento y unidad en ECOSUR (bschmoock@ecosur.mx). Rehema M. White es profesora en la Universidad de St. Andrews, Escocia (rmw11@st-andrews.ac.uk). Lou Lecuyer es oficial del programa Agricultura, Alimentación y Agroambiente para la Comunidad de Municipios del Val de Drôme, Francia (lecuyer.lou@gmail.com).